



## COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Tibú, 5 de Octubre de 2017

La Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana del municipio de Tibú, COCCAM Tibú, denuncia ante la opinión pública los hechos que vienen ocurriendo en el municipio de Tumaco, Nariño a causa del incumplimiento de los compromisos de sustitución por parte del Gobierno Nacional.

El pasado 4 de Marzo se firmó un primer acuerdo de sustitución en el municipio de Tumaco entre el Gobierno Nacional y más de 1100 familias campesinas cocaleras, en donde el Gobierno se comprometió a implementar el Punto 4 del Acuerdo Final de Paz, específicamente el Programa Nacional Integral de Sustitución. Sin embargo, semanas después la respuesta del Gobierno fue enviar la erradicación forzada al municipio, ocasionando así un paro en la región que duraría más de 15 días y que ocasionaría numerosos heridos, incalculables pérdidas económicas y el aumento de la desconfianza por parte del campesinado hacia el Gobierno.

Como resultado de todo este proceso, se firma el 4 de abril – un mes después del primer acuerdo voluntario de sustitución – un nuevo acuerdo con cronogramas, fechas y compromisos claros.

Sin embargo, desde el pasado 28 de Septiembre y frente al incumplimiento de algunos compromisos pactados por el Gobierno Nacional en el proceso de sustitución, varias comunidades pertenecientes al municipio de Tumaco se encuentran desarrollando acciones de protesta pacífica, ante lo cual la respuesta por parte del Estado es contundente. Los días 4 y 5 de octubre la Fuerza Pública, a manos del Ejército y la Policía Nacional, atacó con arma de fuego a la población civil, dejando un saldo inicial de 4 compañeros muertos y más de 15 heridos.

Frente a esta situación, desde la COCCAM de Tibú nos solidarizamos con los compañeros y compañeras de Tumaco, quienes viven una grave situación de violación a sus derechos humanos y exigimos la instalación urgente de una comisión de verificación compuesta por todas las instituciones pertinentes, la Iglesia, las Organizaciones sociales, la ONU y las FARC para velar por la protección y seguridad de los campesinos y campesinas afectados por esta situación. Adicionalmente, exigimos al Gobierno Nacional que cumpla los compromisos que ha adquirido con las comunidades y que renuncie a la estrategia militar de erradicación violenta y forzada que viene implementando a través de la Resolución 3080. Consideramos que la respuesta a la movilización y la protesta social no puede ser la militarización de nuestros territorios y en ese sentido, se hace fundamental seguir exigiendo garantías para proteger nuestra vida.

En la construcción de una paz estable, duradera y con justicia social, nuestra vida e integridad no deben ser amenazadas.